



Proceso	Imposición de servidumbre eléctrica
Demandante	Empresas Publicas de Medellín
Demandado	Otraparte S.A.S.
Radicado	05001 31 03 009 2021 00057 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Auto	No.
Decisión	Revoca
Tema	<p>Proceso de imposición de servidumbre de energía eléctrica. Es trámite especial. Integración del contradictorio.</p> <p>Luego, por tratarse de un trámite especial, la conformación del contradictorio se rige por lo dispuesto en el mismo, en este caso el artículo 2.2.3.7.5.2. del Decreto 1073 de 2015, el cual señala que: <i>“La demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los respectivos bienes,</i> a diferencia de lo que consagra el rito del código vigente, que exige la citación de las personas que tengan derechos reales de cualquier naturaleza sobre los predios dominantes y sirvientes, de acuerdo con el certificado del registrado de instrumentos públicos que debe acompañar a la demanda (artículo 376 del C. General del Proceso).</p>

2024-015

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín, frente al auto del 9 de mayo de 2023, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso de imposición de

servidumbre eléctrica que adelanta en contra de la sociedad Otraparte S.A.S., mediante el cual declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito, levantó las medidas cautelares y ordenó el archivo del expediente.

I. ANTECEDENTES

1. Empresas Públicas de Medellín formuló demanda con pretensión constitutiva de servidumbre de energía eléctrica en contra de la sociedad Otraparte S.A.S., con el fin de imponer dicho gravamen en predios de su propiedad identificados con M.I 034-77, 034-78 y 034-5234 ubicados los dos primeros en la vereda Nueva Colonia y el tercero en la vereda La Suerte del municipio de Turbo (Ant.).

2. La demanda fue admitida por auto del 3 de mayo de 2021, ordenando vincular a la Unidad de Restitución de Tierras, Gobernación de Antioquia, Banco Davivienda S.A. y al Banco de Bogotá, así mismo se decretó la inscripción de la demanda.

3. Por auto del 13 de marzo de 2023, se requirió a la demandante para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de dicho auto cumpliera las siguientes cargas procesales:

(i) *“...comunicar el nombramiento a los peritos designados y acreditará dicho trámite so pena de que, al vencimiento puro y simple del término otorgado, si no cumple con la carga ordenada, se tendrá por desistida tácitamente la oposición a la indemnización por ella presentada.”*

(ii) “a. Integrar el contradictorio con las vinculadas por pasiva BANCO DAVIVIENDA S.A., y BANCO DE BOGOTA y, aporte prueba de ello.

(iii) “b. Aporte los certificados de tradición y libertad de los predios identificados con los F.M.I. Nro. 034-77, Nro. 034-78 y Nro. 034-5234 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, que acredite la inscripción de la cautela”. (archivo 43)

4. Transcurrido el término señalado sin que la parte actora hubiese acreditado el cumplimiento de la carga impuesta, por auto del 9 de mayo de 2023 se declaró la terminación por desistimiento tácito, se ordenó la cancelación de la inscripción de la demanda y la devolución de \$141.382.707,00, a la parte demandante. (archivo 44)

5. La providencia fue recurrida en reposición, y subsidiariamente en apelación, con fundamento en que (i) se le había dado el traslado del expediente –sic- a las entidades Banco de Bogotá y Davivienda de acuerdo a lo ordenado; (ii) la vinculación al proceso no incide en el trámite, por tratarse de acreedores hipotecarios y no titulares de derecho real de dominio; de ahí que, no tienen la facultad de disposición sobre el predio y no están llamadas a decidir sobre la afectación o la posibilidad de constituir gravámenes sobre ellos, razón por la que no podría predicarse que es similar, para ellos, la relación jurídica con el predio objeto de litigio, configurándose la decisión en un exceso de ritual manifiesto, que obstruye la materialización del derecho sustancial y, no toma en consideración las condiciones subjetivas y específicas del caso (STC4282 de 2022), pues simplemente se aplicó la figura del desistimiento tácito consagrado en el artículo 317 ib. (archivo 45)

6. El recurso horizontal fue resuelto de manera desfavorable por auto del 30 de enero último, aludiendo el juez de conocimiento que, a pesar del requerimiento hecho y transcurrido el plazo legal anunciado no se dio cumplimiento a las exigencias hechas para continuar con el trámite del proceso, y no reposa prueba sumaria de que, aquella inactividad, obedeciera a una fuerza mayor que haya logrado interrumpir el término del requerimiento en mención, pues sólo con el escrito del recurso presentado el 15 de mayo de 2023 se aportó las constancias de entrega de las notificaciones a las entidades; y se allegó los certificados de libertad y tradición, esto, cuando habían vencido los términos (3 de mayo de 2023). (archivo 50)

7. Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. La Corte en sentencia T-078 de 2022 señaló que “(...) *el desistimiento tácito es una forma de terminación anormal del proceso y es la consecuencia de la inactividad de la parte “a cuyas instancias se promovió un trámite o proceso, el cual se paralizó por su causa”. Esta figura se emplea para (i) evitar la paralización del aparato jurisdiccional en ciertos eventos; (ii) obtener la efectividad de los derechos de quienes actúan o participan en la administración de justicia, pues la efectividad de los derechos depende de la prontitud de los medios que sirven para materializarlos; y (iii) promover la certeza jurídica de quienes actúan como partes en los procesos, en la medida en que busca que se administre pronta y cumplida justicia, y que las*

controversias no se prolonguen indefinidamente a lo largo del tiempo”.

2. El desistimiento tácito está consagrado en el artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, vigente desde el 1 de octubre de 2012, que señala los eventos en los cuales se aplicará el desistimiento tácito, así:

*“...1. **Cuando para continuar el trámite de la demanda**, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.*

“Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas. (Negritas y subrayas fuera del Texto)

3. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la competencia del juez para declarar el desistimiento tácito se presenta en los eventos en que (i) la carga es impuesta a la parte procesal que promovió el trámite, y por tanto, de ningún modo opera si la actividad está a cargo del juez o de la contraparte; y, (ii) siempre que el cumplimiento de esa carga sea indispensable para avanzar con el trámite; es decir, si el juez, en ejercicio de sus poderes ordinarios en absoluto puede garantizar la prosecución o el impulso del proceso (criterio reiterado en la sentencia C-868 de 2010).

Significa lo expuesto que, para dar aplicación al numeral primero de la normativa en cita, previo a la sanción procesal de decretarse

la terminación del proceso por desistimiento tácito, el juez de conocimiento tiene que establecer el posible abandono y desinterés en la actuación, para lo cual la norma ha dispuesto que se emita requerimiento sobre la orden de cumplimiento que se encuentra a su cargo dentro de los 30 días siguientes, siendo esta la oportunidad procesal que tiene la parte interesada para cumplir o realizar la actuación pendiente, y en ese lapso se podrá advertir su interés o no en la actuación que adelanta.

4. Sentadas las premisas básicas anteriores, los hechos relevantes resultan ser los siguientes:

(i) Por auto del 13 de marzo 2023, se requirió a la parte demandante para que en el término de (30) días so pena de que operara el desistimiento tácito integrara el contradictorio con las vinculadas por pasiva Banco Davivienda S.A., y Banco de Bogotá y, aportará los certificados de tradición y libertad de los predios identificados con los folios reales 034-77, Nro. 034-78 y Nro. 034-5234 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, que acreditaran la inscripción de la cautela.

(ii) Término que venció el 3 de mayo siguiente, sin que la parte actora hubiese acreditado la integración del contradictorio y la prueba de inscripción de la demanda.

(iii) El 15 mayo del mismo mes, la parte actora allegó prueba del cumplimiento del requerimiento que se le había hecho.

5. Aplicadas las nociones anteriores al asunto, para la Sala es claro que la actuación procesal encomendada se hizo de manera extemporánea, frente a lo cual no existe discusión alguna.

Sin embargo, el *a quo* ha debido tener en cuenta, que se tramita proceso de imposición de servidumbre de energía eléctrica, frente al que la Corte señaló en sentencia SC4658-2020:

“Acorde con el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, la de conducción de energía eléctrica es una servidumbre de estirpe legal, que deben soportar *«los predios por los cuales deben pasar las líneas respectivas»*, y que, a voces del canon 25 de la Ley 56 de 1981, *«(...) supone para las entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, **la facultad de pasar por los predios afectados, por vía aérea, subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, ocupar las zonas objeto de la servidumbre, transitar por las mismas, adelantar las obras, ejercer la vigilancia, conservación y mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su ejercicio»***.”

“Ahora bien, como el ejercicio de esas prerrogativas implica una intrusión (justificada) del Estado en la propiedad privada, la imposición de la servidumbre exige –por vía general– la mediación de los jueces, con el fin de que estos asignen el *ius in re aliena* a la entidad de derecho público y determinen, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, una compensación razonable para el propietario del predio sirviente.

“Pero esa controversia no podría adelantarse por la senda de los procesos declarativos que entonces preveía el ordenamiento jurídico (ordinario, abreviado, verbal y verbal sumario), pues estos incluían una serie de etapas que, amén de innecesarias frente al restringido debate que se suscita en estos litigios, eran incompatibles con el vertiginoso avance que ameritan las obras públicas de infraestructura energética.

“Para atender esa problemática, la misma Ley 56 de 1981 estableció un procedimiento especial, que luego fue desarrollado en el Decreto Reglamentario 2580 de 1985, actualmente compendiado en el Capítulo VII, Sección 5, del Decreto 1073 de 2015¹, y cuyo canon 2.2.3.7.5.3. reza:

¹ Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.

...

“Resalta la Sala que la norma trasuntada no pretendía instaurar formalidades adicionales a las establecidas para los juicios declarativos, tal como ocurre con las “disposiciones especiales”² que contemplan las codificaciones adjetivas para los trámites de resolución de compraventa, pertenencia, rendición provocada de cuentas, entrega de la cosa por el tradente al adquirente, declaración de bienes vacantes o mostrencos, o restitución de inmuebles arrendados, entre otros.

“En realidad, la pauta legal que previamente se transcribió establece las *formas propias* del proceso de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, entendidas como «*las reglas que, de conformidad con la naturaleza de cada juicio, determinan cada una de las etapas propias de un proceso y que, a su vez, se constituyen en las garantías de defensa y de seguridad jurídica para los intervinientes en el respectivo litigio*» (CC, C-140 de 1995).

“Expresado de otro modo, este proceso declarativo contiene una sistemática diferenciada respecto de los demás que prevé la codificación adjetiva civil; ello lo evidencia la reglamentación heterogénea de las formas de notificación, la necesaria realización de una inspección judicial dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la demanda, los breves términos de los traslados, la imposibilidad de presentar excepciones, y el método de fijación de la compensación correspondiente.

“Y, como lo advirtiera el tribunal, esa preceptiva creó un trámite diferenciado, distinto de los descritos en el Libro Tercero del Código General del Proceso, en el que no se replicó la fase de alegatos de cierre, debiéndose añadir que es perfectamente viable omitir ese espacio, pues el mismo no es de forzosa realización en todos los juicios civiles.

“Nótese que la posibilidad de que las partes expongan esas alegaciones finales se consagró en procesos como el verbal (artículo 373-1, Código General del Proceso), verbal sumario (artículo 392, *ibidem*), ejecutivo con excepciones de mérito (artículo 443-2, *ib.*), y de

² Esas «*disposiciones especiales*», que es como fueron rotuladas por el mismo legislador, estaban compendiadas en los artículos 406, 407 y 415 a 426 del Código de Procedimiento Civil, que, *mutatis mutandis*, corresponden a los cánones 374 a 389 del Código General del Proceso.

disolución, nulidad y liquidación de sociedades (artículo 528, *ib.*), por citar algunos ejemplos. Pero también existen otros en los que dicha etapa no está contemplada, sin que ello pueda considerarse un vacío legislativo, en tanto que la existencia de procesos diferenciados implica, necesariamente, admitir que su estructura también sea disímil. (Negritas y cursivas propias del texto)

6. Luego, por tratarse de un trámite especial, la conformación del contradictorio se rige por lo dispuesto en el mismo, en este caso el artículo 2.2.3.7.5.2. del Decreto 1073 de 2015, el cual señala que: “*La demanda se dirigirá contra los titulares de **derechos reales principales** sobre los respectivos bienes*, a diferencia de lo que consagra el rito del código vigente, que exige la citación de las personas que tengan derechos reales de cualquier naturaleza sobre los predios dominantes y sirvientes, de acuerdo con el certificado del registrado de instrumentos públicos que debe acompañar a la demanda (artículo 376 del C. General del Proceso)

Lo anterior significa que la citación que se hizo al Banco Davivienda S.A. y Banco de Bogotá, como titulares del derecho real de hipoteca desborda las previsiones del cuerpo normativo especial al que se hizo referencia, pero, además, de considerarla necesaria no impide continuar con el trámite del proceso, como que, se itera, la integración del litisconsorcio en procesos de imposición de servidumbre de energía eléctrica se hace con los titulares de derechos reales principales.

7. Conclúyese, el requerimiento fundante de la decisión final no podía tener la consecuencia advertida por el *a quo*, imponiéndose

en consecuencia la revocatoria del auto recurrido. Sin costas en esta instancia por no haberse causado.

III. RESUELVE

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA** auto del 9 de mayo del año anterior, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, mediante el cual declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito y en su lugar se continuará con el trámite del proceso. Sin costas en esta instancia por no haberse causado.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 9891c55675e5967b03dd828cddf5547a9d1eea5cef92f5328e2fd33816836bb4
Documento generado en 08/03/2024 11:24:43 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>